**JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 8
PALMA DE MALLORCA**

SENTENCIA: 00272/2022

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000403 /2022

Procedimiento origen: /

Sobre OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE D/ña.

Procurador/a Sr/a.

Abogado/a Sr/a.

DEMANDADO D/ña. CAIXABANK PAYMETS & CONSUMER EFC

Procurador/a Sr/a.

Abogado/a Sr/a.

SENTENCIA

En Palma a 19 de diciembre de 2022.

Vistos por mí, Dña. , Juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia 8 de Palma, los autos de procedimiento ordinario iniciados en este Juzgado con el número 403/2022 a instancia de Dña. , representada por el Procurador de los Tribunales y asistida por el Abogado José Carlos Gómez Fernández, contra la entidad Caixabank Payments & Consumer EFC, representada por la Procuradora de los Tribunales y asistida por la Abogada

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En fecha 1 de abril de 2022 tuvo entrada en el Decanato de los Juzgados de esta ciudad escrito de demanda, cuyo conocimiento correspondió por turno de reparto a este Juzgado, a instancia de Dña. , en el que, tras exponer los hechos y fundamentos tenidos por convenientes, terminaba suplicando el dictado de sentencia "por la que se estime íntegramente la demanda y:

Declare la nulidad del contrato de autos por no superar el doble filtro de transparencia. Y subsidiariamente, declare la nulidad por abusividad de la cláusula de interés moratorio o penalización superior en 2 puntos al remuneratorio, y

Condene a la demandada a la restitución de todos los efectos dimanantes del contrato declarado nulo y de los efectos de las cláusulas y prácticas abusivas impugnadas, hasta el último pago realizado; más los intereses legales y procesales y el pago de las costas del pleito”.

Segundo.- Admitida a trámite la demanda y previo traslado, fue contestada por la demandada que se opuso a su estimación, siendo convocadas las partes al acto de audiencia previa, que tuvo lugar el día señalado con la asistencia de ambas y en la que, siendo documental toda la prueba propuesta y admitida, de conformidad con el artículo 429.8 de la LEC, quedaron los autos vistos para sentencia.

Tercero.- En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales, salvo en lo relativo a los plazos dado el cúmulo de asuntos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte actora sostiene en su demanda que contrató con la entidad demandada una tarjeta de crédito revolving en fecha 11 de agosto de 2005, sin que se le explicara el funcionamiento de dicha tarjeta, ni se le ofreciera la información precontractual precisa, al destacarse únicamente la cuota a pagar, no el TIN ni la TAE, confundiendo con ello al cliente, siendo el texto del contrato farragoso y estando comprimido, de difícil lectura, en el que se fijó además un interés moratorio abusivo; interesando la nulidad del contrato por no superar el doble filtro de transparencia y, subsidiariamente, la nulidad de la cláusula de intereses moratorios por abusividad y la condena a la restitución de todos los efectos dimanantes del contrato.

La demandada se ha opuesto a la estimación de la demanda, alegando ante todo que la tarjeta Sa Nostra contratada el 11 de agosto de 2005, tarjeta n° , no era una tarjeta revolving, y que la tarjeta a que se refiere en la demanda, la n° fue contratada el 3 de diciembre de 2015; Asimismo, que la acción principal ejercitada no puede prosperar puesto que el tipo de interés constituye el elemento esencial del contrato por lo que no puede ser calificado como abusivo, no incurriendo el contrato en falta de transparencia, negando también el carácter abusivo de los intereses moratorios.

SEGUNDO.- En razón de la documentación aportada puede establecerse que, efectivamente, en fecha 11 de agosto de 2005 se firmó por la actora con la entonces entidad “Sa Nostra”

Caixa de Balears, el contrato de tarjeta n° , modalidad "contrato Sa Nostra normal", tarjeta número - , fijándose una cuota anual de 7'51 euros, comisión disposición efectivo en propia entidad "exento", disposición efectivo red 6000/4B de 0'50 euros, disposición efectivo otras entidades 3'00% mínimo 2'40 euros; En el reverso de dicho contrato se indicaba que la tarjeta podía serlo bajo la modalidad de débito, de crédito o de monedero electrónico, o incluso una sola tarjeta podía serlo de varias modalidades. En el contrato no se indica el tipo de interés aplicable; La cláusula 3ª sobre operativa de la tarjeta indica sobre el pago aplazado que "la cantidad aplazada devengará diariamente a favor de La Caja el interés nominal mensual indicado en el anverso del presente contrato", pero en el anverso no se indica (documento n°4 demanda).

Ahora bien, en fecha 3 de diciembre de 2015, como sostiene la demandada, se firmó un nuevo contrato en ese momento con BMN, tarjeta revolving n° (documento n°2 contestación a la demanda), y respecto del mismo la actora recibió después una comunicación, el 16 de octubre de 2018. en la que Bankia le indicaba que se le entregaba una nueva tarjeta que venía a sustituir a la anterior.

Por el número de contrato y tarjeta está claro que el inicial de 2005 dejó de estar en vigor con la firma del contrato de 2015, quedando la duda de si la actora utilizó esa tarjeta como de débito o también como tarjeta de crédito.

TERCERO.- Las alegaciones de la demanda vienen referidas fundamentalmente a este contrato inicial, al efecto se indica que en el mismo no consta ni TIN ni TAE, ni se indica el límite de crédito aplicable, la letra es pequeña, el texto es farragoso y las condiciones quedan desdibujadas; además el contrato no está firmado, no se entregó copia de las condiciones generales y la cuota es el elemento que más destaca del contrato cuando resulta que en estos contratos la cuota a pagar no es el precio.

Sentado que dicho contrato dejó de estar en vigor, se hace en el suplico referencia a los contratos posteriores, al indicarse respecto de la petición principal que la acción de nulidad por no superar el doble filtro de transparencia se dirige al contrato de 11 de agosto de 2005 y sucesivos. Al efecto, se estima que no superan el doble control de transparencia las condiciones relativas a la fijación del interés remuneratorio, el modo de amortización de la deuda, los costes y precio total del contrato.

El contrato de 3 de diciembre de 2015 lo fue de una tarjeta de crédito revolving n° , así se indica en el mismo, en el que se reflejan las comisiones por reintegros, consultas, por reclamación de posiciones deudoras,

amortización anticipada y exceso sobre límite, como la forma de pago a través de cuota fija de 30 euros, TAE 23´87%, día de liquidación 31, tipo de interés de demora 1´97% mensual, límite de crédito 600 euros. En el ejemplar presentado por la demandada, además de las condiciones antes indicadas, no se detalla la operativa del sistema revolving, que apenas se refleja en el documento de 29 de enero de 2019 referido al mismo contrato (en la comunicación referida por la actora se indica que la nueva tarjeta sustituye a la anterior de BMN "manteniendo las mismas características y condiciones").

Tratándose de un contrato celebrado con un consumidor, la SAP Illes Balears, Civil Sección 4ª, de 20 de mayo de 2021, rec.763/2020, señala al efecto que "existe un doble control de transparencia en la incorporación y en el contenido (este último a fin de evaluar la posible abusividad del mismo) en contraposición con los contratos suscritos entre profesionales, donde la válida inserción de una condición general queda condicionada a la transparencia de su incorporación conforme a las exigencias de los artículos 5 y 7 LCGC".

Como ha venido afirmando la jurisprudencia, el control de transparencia tiene por objeto las cláusulas predispuestas que afectan a los elementos esenciales del contrato. A las condiciones generales que versan sobre elementos esenciales del contrato se les exige un plus de información que permita al consumidor adoptar su decisión de contratar con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que le supondrá concertar el contrato, sin necesidad de realizar un análisis minucioso y pormenorizado del mismo. Con el requisito de transparencia material se persigue la consecuencia de un resultado: un consumidor suficientemente informado. En este sentido, señala la STS 585/2020 de 6 de noviembre, con cita de la 509/2020, de 6 de octubre, que el adecuado conocimiento de la cláusula, de su trascendencia y de su incidencia en la ejecución del contrato, a fin de que el consumidor pueda adoptar su decisión económica después de haber sido informado cumplidamente, es un resultado insustituible, aunque susceptible de ser alcanzado por pluralidad de medios. Lo relevante es que un consumidor medio, razonablemente atento y perspicaz, pueda tener un conocimiento adecuado de la cláusula concreta, cualquiera que fuera el medio por el que adquirió tal conocimiento.

Al efecto señala la SAP de Cantabria, Sección 2, de 8 de noviembre de 2021, rec.982/2020, que la falta de transparencia material sería condición necesaria pero no suficiente para la apreciación de la abusividad (SSTS 171/2017, de 9 de marzo, 538/2019 de 11 de octubre, 121/2020 de 24 de febrero, 408/2020 de 7 de julio, 585/2020 de 6 de noviembre y las dictadas con los números 595, 596, 597 y 598/2020 de 12 de noviembre).

Añade que "para superar el control de transparencia que se denuncia infringido en relación con el interés ordinario y su aplicación, resulta relevante la información ofrecida que permita evaluar el coste económico del contrato para el consumidor. En particular, como recuerda la STJUE de 9 de julio de 2020 (con cita de la de 5 de junio de 2019, GT C-38/17, EU:C:2019:461, apartado 33) debe situarse al correspondiente consumidor en condiciones de comprender las consecuencias económicas que se derivan para él. La STS Pleno 608/2017 de 15 de noviembre, con cita de la STJUE caso Andriciuc, recuerda que la exigencia de que una cláusula contractual debe redactarse de manera clara y comprensible supone que, en el caso de los contratos de crédito, las instituciones financieras deben facilitar a los prestatarios la información suficiente para que éstos puedan tomar decisiones fundadas y prudentes. La importancia de la información en la contratación con los consumidores, para cumplir con la exigencia de la transparencia de las condiciones generales, se traslada a la fase precontractual cuando se adopta la decisión de contratar (entre otras, STJUE 21 de marzo de 2013, asunto C-92/11, y de 30 de abril de 2014, asunto C-26/13). Por ello nos recuerda la reciente STS 564/2020, de 27 de octubre, que dentro del conjunto de circunstancias que son relevantes para verificar que el consumidor ha podido evaluar, antes de vincularse contractualmente, el coste total de su préstamo, como ha señalado el TJUE en su sentencia de 3 de marzo de 2020, C-125/18, Gómez del Moral, desempeñan un papel decisivo, además de una redacción clara y comprensible que permitan a un consumidor medio evaluar tal coste, la falta de mención en el contrato de préstamo de la información que se considere esencial a la vista de la naturaleza de los bienes o de los servicios que son objeto de dicho contrato (sentencia de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc, C-186/16, EU:C:2017:703, apartado 47 y jurisprudencia citada)".

En este caso el alcance de las cláusulas y condiciones esenciales del contrato no consta que formara parte de los tratos preliminares o negociaciones, ni como se ha indicado resultó destacado y diferenciado en el modelo de solicitud ni consta que lo fuere en el contexto de la contratación. Y, aparte de indicarse el límite del crédito y la TAE, día de liquidación y comisiones aplicables, no se menciona siquiera la forma de amortización, de tal modo que el consumidor, cuando solicita la tarjeta, no puede saber ni entender el coste del crédito, ni las consecuencias del sistema de amortización.

Como señala la STS, Sala Civil Pleno, de 6 de noviembre de 2020, rcud.3990/2016, "la falta de transparencia de las condiciones generales provoca un desequilibrio sustancial en

perjuicio del consumidor, objetivamente incompatible con las exigencias de la buena fe, consistente en la imposibilidad de hacerse una representación fiel del impacto económico que le supondrá obtener el préstamo o crédito, lo que priva al consumidor de la posibilidad de comparar correctamente entre las diferentes ofertas existentes en el mercado”.

Efectivamente estamos ante una tarjeta de crédito revolving, pero en el contrato no se explica dicho sistema, no se indica que se trata de una línea de crédito en la que, a medida que se amortiza el capital, pueden efectuarse nuevas disposiciones pues se reconstituye el crédito disponible; No se especifica que las nuevas disposiciones van a generar nuevos intereses que irán incrementando el saldo deudor junto con las comisiones y gastos correspondientes, tampoco se indica que las cuotas impagadas se capitalizarán con devengo de intereses y comisiones por reclamación de cuotas o impago, que también se capitalizarán devengando nuevos intereses. En suma, no se ofrece ninguna información que permita al consumidor entender la carga económica del contrato.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que el control de incorporación o de transparencia material debe realizarse en el momento de la contratación, al margen de las vicisitudes posteriores del funcionamiento del contrato, y la falta de prueba sobre la información verbal resulta palmaria. Estampar la firma en un contrato de adhesión sujeto a condiciones generales no supone necesariamente el conocimiento y la aceptación de todas y cada una de las estipulaciones del documento (en este sentido se pronuncia la SAP de Pontevedra Civil Sección 1ª de 18 de febrero de 2022, rec.867/2021), aun cuando en este caso no se han aportado por la demandada las condiciones generales por lo que no consta que fueran entregadas a la actora ni tampoco su contenido.

En el documento remitido por Bankia a la actora fechado el 29 de enero de 2019, se indica sobre las modalidades de pago, que “la cuantía de los pagos mensuales será, por defecto, la “cuota fija mensual” establecida en las condiciones particulares de este contrato. En ningún caso se admitirá el abono de cuotas mensuales inferiores a la cuota fija mensual, salvo en los supuestos en que el saldo pendiente de pago sea inferior a la misma. El titular podrá solicitar a Bankia la modificación de la cuota fija mensual, siempre dentro de las posibilidades que para el producto contratado ofrezca Bankia en cada momento. El cobro de las comisiones será aplazado, devengando intereses desde el momento en que se produzca el hecho que las determine. Quedan excluidas del cobro de intereses tanto la cuota de alta, como la cuota anual de renovación, Bankia reflejará las transacciones en la cuenta vinculada a la tarjeta una vez el sistema de pagos las haya notificado. Las comisiones y gastos se reflejarán en la fecha

en la que sean exigibles. Las cantidades a abonar en la cuenta vinculada a la tarjeta se reflejarán una vez Bankia haya recibido evidencia de la procedencia y validez del abono". Y respecto a los intereses por aplazamiento de pago, que "la cantidad aplazada generará intereses que se devengarán diariamente desde la fecha de la operación de acuerdo a la siguiente fórmula: $I=C$ (importe de la operación) * r (tipo de interés diario de aplazamiento) * d (número de días de aplazamiento), sobre un año de base 360 días. La liquidación de intereses se realizará por meses vencidos y su importe se acumulará al saldo de la tarjeta".

De dicha información tampoco puede deducirse el funcionamiento de una tarjeta revolving.

CUARTO.- La SAP de Asturias, Civil Sección 7^a, de fecha 17 de septiembre de 2020, rec.259/2020, establece que *"ciertamente, cualquier ciudadano medio es conocedor que todo crédito comporta un coste a modo del pago de los correspondientes intereses, como también que cuanto mayor sea el plazo de amortización mayor será el coste, ahora bien, en el supuesto de autos estamos ante una tarjeta tipo revolving, que a diferencia de las tarjetas de crédito ordinarias son un tipo de tarjeta en la que el cliente dispone de un límite de crédito determinado, que puede devolverse a plazos, a través de cuotas periódicas, que pueden establecerse como un porcentaje de la deuda existente o como una cuota fija, cuotas periódicas que puede elegir y cambiar dentro de unos mínimos establecidos por la entidad, pero su peculiaridad reside en que la deuda derivada del crédito se "renueva" mensualmente: disminuye con los abonos que se hacen a través del pago de las cuotas, pero aumenta mediante el uso de la tarjeta (pagos, reintegros en cajero), así como con los intereses, las comisiones y otros gastos generados, que se financian conjuntamente. Es decir, como se indica en el recurso, la reconstitución del capital que se debe devolver, las cuantías de las cuotas que el titular de la tarjeta abona de forma periódica vuelven a formar parte del crédito disponible del cliente (de ahí su nombre revolving), por lo que constituye un crédito que se renueva de manera automática a su vencimiento mensual, de forma que en realidad es un crédito rotativo equiparable a una línea de crédito permanente. Sobre el capital dispuesto se aplica el tipo de interés pactado, y adicionalmente si se producen impagos, la deuda impagada se capitaliza nuevamente con devengo de intereses, hecho que se ve agravado con el posible cargo de comisiones por reclamación de cuota impagada o de posiciones deudoras. Además, los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio. Son estas peculiaridades, que implican, además, siendo hecho notorio, un mayor tipo de*

interés remuneratorio que el que comportan los créditos al consumo en general y los que se ofrecen mediante tarjetas de crédito en particular, unido a que no es posible emitir un cuadro de amortización previo al variar la deuda y, en su caso, las cuotas mensuales a pagar, las que justifican que se exija de una especial diligencia por parte de la entidad financiera a la hora de explicar de una forma cabal y comprensiva a su cliente el verdadero coste del negocio que concierne, y es que como señala el Tribunal Supremo en su sentencia de 4 de marzo de 2020, las propias peculiaridades del crédito revolving, puede provocar el efecto de convertir al prestatario en un deudor "cautivo", por ello nuestras Audiencias han puesto especial hincapié en el control de transparencia de este tipo de operaciones (así sentencias Audiencias Provinciales de León Sección Primera de 15 de mayo de 2020, Valladolid Sección Tercera de 25 de mayo de 2020 o Barcelona Sección Primera de 11 de marzo de 2019".

También la SAP de Valladolid, Civil Sección 3ª, de 19 de julio de 2022, rec.958/2021 razona que "a criterio de esta Sala, la tarjeta de crédito sometida a consideración no supera el control de transparencia cualificado pues, como se ha dicho más arriba al definir las condiciones que figuran en el contrato, y como corresponde a la modalidad de crédito revolvente, se dispone de un límite de crédito que puede devolverse a plazos con una reducida cuota, cuya peculiaridad consiste en que la deuda derivada del crédito se "renueva" mensualmente disminuyendo con los abonos que se hacen a través del pago de las cuotas e incrementándose mediante las peticiones de numerario o el uso de la tarjeta, así como con los intereses, las comisiones y otros gastos generados, que se financian conjuntamente.

Las consecuencias de esta peculiar característica del contrato, como ha puesto de manifiesto la doctrina, es que si se paga una cuota mensual de reducido importe respecto al saldo total de la deuda, la amortización del principal se realizará a un plazo muy largo, remunerándose a la oferente un elevado importe en concepto de intereses; y, por otro lado, no puede ofrecerse un cuadro de amortización previo dada la variabilidad del alcance total de la deuda, vinculado al de las cuotas mensuales lo que, como expresaba la STS de 4 de marzo de 2020, produce el riesgo de que "puede convertir al prestatario en un deudor "cautivo" y los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio".

Un amplio sector de la jurisprudencia provincial, en trance de llevar a cabo el referido control de transparencia cualificado en ese tipo de contratos ha llegado a una conclusión negativa, pudiendo citarse, entre otras, las de 11 de enero de 2021, AP Barcelona Sección 1, SAP Cáceres de 4 de

marzo de 2021, sobre la tarjeta de crédito Servicios Financieros Carrefour; la SAP Oviedo de 22 de marzo de 2021 y SAP León de 20 de abril de 2021 Sentencia sobre la tarjeta Media Markt-Cetelem; o SAP Salamanca 22 de febrero de 2022 sobre Tarjeta Pryca-Carrefour.

Como se insiste en estas resoluciones, las características y peculiaridades de este tipo de operaciones de crédito expuestas, hace exigible que por parte de la entidad financiera se ofrezca al cliente una información previa, clara y completa sobre su funcionamiento para que el consumidor pueda conocer el alcance real de los efectos económicos en la aplicación del interés retributivo pactado y en definitiva, la carga económica que iba a asumir al contratar esta modalidad de crédito, pues si bien todo consumidor sabe que contratar una operación de crédito tiene un coste, pues conlleva el pago de un interés TAE, no tiene porqué conocer el funcionamiento de este tipo de tarjetas de pago aplazado y créditos revolving, en los que los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio y el límite del crédito se recompone constantemente, de modo que si las cuotas no son muy elevadas en comparación con la deuda pendiente, se puede llegar a pagar durante mucho tiempo una elevada cantidad de intereses frente a poca amortización de capital. Resulta exigible que por parte de la entidad bancaria se ofrezca al cliente una adecuada información sobre proporción del pago de amortización de capital y de intereses, que no puede inferirse de la simple lectura del contrato aportado con la demanda.

Así, aunque el TAE aparece claramente identificado en la primera página contrato, la estipulación reguladora de los intereses que introduce el sistema "revolving" no se destaca en modo alguno, sino que se introduce dentro del condicionado general, sin otra advertencia o explicación acerca de su funcionamiento y el eventual coste derivado del fraccionamiento y el aplazamiento de pago en mensualidades reducidas, más allá de reflejar la fórmula de cálculo de intereses y la de comisiones y gastos, que resultan ininteligibles para un consumidor medio.

Por otro lado, tampoco consta ni se ha acreditado en modo alguno que se hubiera informado al cliente con carácter previo y de forma clara, comprensible y suficiente sobre las características y funcionamiento de esta modalidad de contrato para que pudiera tener conocimiento de la carga económica que podía conllevarle su contratación, lo que no se desprende de la documental aportada a autos, y que ha sido examinada".

Debe por todo lo expuesto, apreciarse la falta de transparencia invocada respecto a la cláusula de intereses remuneratorios y al propio sistema revolving, que determinará la nulidad del contrato por afectar a un elemento esencial del

mismo, sin que sea susceptible de integración judicial, debiendo reintegrarse las partes recíprocamente las prestaciones recibidas como si el negocio no hubiera existido.

QUINTO.- Al hijo de lo anterior, conforme el artículo 9.2 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, "la sentencia estimatoria, obtenida en un proceso incoado mediante el ejercicio de la acción individual de nulidad o de declaración de no incorporación, decretará la nulidad o no incorporación al contrato de las cláusulas generales afectadas y aclarará la eficacia del contrato de acuerdo con el artículo 10, o declarará la nulidad del propio contrato cuando la nulidad de aquellas o su no incorporación afectara a uno de los elementos esenciales del mismo en los términos del artículo 1261 del Código civil".

Y el artículo 10.1 dispone que "la no incorporación al contrato de las cláusulas de las condiciones generales o la declaración de nulidad de las mismas no determinará la ineficacia total del contrato, si éste puede subsistir sin tales cláusulas, extremo sobre el que deberá pronunciarse la sentencia".

En este caso, no obstante, la declaración de falta de transparencia afecta a unas cláusulas definitorias de uno de los elementos esenciales del contrato en cuestión, lo que obliga a declarar la nulidad en su totalidad. Siendo así, en aplicación del artículo 1303 del CC, procede la recíproca restitución de las cosas que hubieren sido materia del contrato, con sus frutos, y del precio con los intereses, de modo que la demandada habrá de restituir a la actora en aquellas cantidades que excedan del capital dispuesto, capital que habrá de ser devuelto por la actora una vez deducido todo lo ya abonado.

Siendo así, al no constar que la tarjeta haya dejado de utilizarse, será en ejecución de sentencia donde se determinará el importe total dispuesto y el total abonado por la actora.

SEXTO.- En materia de intereses son de aplicación los artículos 1101 y 1108 del Código civil. Tales intereses se devengarán desde la fecha de presentación de la demanda. Al efecto, señala la SAP de Málaga, Civil Sección 6ª de 24 de junio de 2021, rec.2291/2019, que "las consecuencias de la nulidad están recogidas en el Código civil al establecer que dicha cláusula es como si no hubiera existido y deberá devolverse lo que se percibió en base a ella conforme dispone el artículo 1303 del código civil, en virtud del cual debe de devolverse el precio con los intereses. No es cierto, como indica la parte apelada, que no haya existido pretensión condenatoria al pago de cantidad pues así se recogía en la

demanda y la propia sentencia condena a devolver íntegramente las cantidades abonadas en exceso. El hecho de que la cantidad objeto de condena no sea líquida ciertamente impide el abono de los intereses en base al art. 576 LEC hasta tanto dicha cantidad sea líquida pero no impide la aplicación de las consecuencias de la nulidad que no está referido al pago de intereses moratorios sino a la indemnidad del consumidor que debe percibir la cosa con sus frutos (en este caso el dinero pagado de más con sus intereses), y al liquidarse las cantidades abonadas en exceso deberá igualmente calcularse el interés que debe pagarse”.

En materia de costas, es de aplicación el artículo 394 de la LEC que acoge el criterio del vencimiento.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que ESTIMANDO la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales en nombre y representación de Dña. contra la entidad Caixabank Payments & Consumer EFC EP SAU, debo DECLARAR y DECLARO la nulidad de las cláusulas que regulan los intereses y el propio sistema revolving del contrato de tarjeta de crédito de fecha 3/12/2015 por falta de transparencia, con las consecuencias inherentes a dicha declaración, CONDENANDO a la entidad demandada a estar y pasar por tal declaración, debiendo reintegrar a la actora todas las cantidades percibidas que excedan del capital dispuesto con sus intereses correspondientes, cuyo importe se determinará en ejecución de sentencia, con expresa imposición de las costas del proceso a la demandada.

Así por esta sentencia, de la que se unirá certificación a las actuaciones originales para su notificación y cumplimiento, lo pronuncio, mando y firmo.